

COMENTARIOS FINALES	293
NOTAS	305
BIBLIOGRAFÍA CITADA	327

INTRODUCCIÓN

SVAMPA, Maristella, 2005. *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires, Taurus. Cap. 1.

1

En las últimas décadas, la entrada en una nueva etapa de acumulación del capital produjo hondas transformaciones sociales. Esos procesos, caracterizados por la difusión global de nuevas formas de organización social y por la reestructuración de las relaciones sociales, cambiaron las pautas de integración y exclusión, visibles en la nueva articulación entre economía y política. Estos cambios desembocaron en un notorio incremento de las desigualdades en el interior de las sociedades contemporáneas, creando nuevos “bolsones” de pobreza y marginalidad.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en los países centrales los procesos de mutación estructural no se expresaron necesariamente en el desmantelamiento total o cuasitotal de las instituciones y marcos regulatorios típicos del modelo anterior (Estado de Bienestar o Estado Social). En contraste con ello, en las regiones del capitalismo periférico la globalización no sólo profundizó los procesos de transnacionalización del poder económico, sino que se tradujo en el desguace radical del Estado Social en su versión “nacional-popular”, el que más allá de sus limitaciones estructurales y tergiversaciones políticas, se había caracterizado por orientar su acción hacia la tarea nada fácil de producir cierta cohesión social, en un contexto de sociedades heterogéneas, desiguales y dependientes. Así, en Amé-

rica Latina, estas transformaciones, que vinieron de la mano de políticas neoliberales, conllevaron una fuerte desregulación económica y una reestructuración global del Estado, lo cual terminó por acentuar las desigualdades existentes, al tiempo que generó nuevos procesos de exclusión, que afectaron a un conglomerado amplio de sectores sociales.

Recordemos que, como afirmaban hace décadas los teóricos latinoamericanos que reflexionaron sobre la dependencia y la marginalidad, los obstáculos al desarrollo forman parte intrínseca del proceso global del capitalismo y, como tal, son el resultado de la asimétrica articulación entre el centro y la periferia. En ese sentido, en América Latina la dependencia siempre implicó el reconocimiento de que la realidad tenía dos escenas: por un lado, la nacional; por el otro, la internacional. Así, esta dualidad de escenas limitaba los márgenes de acción de los diferentes actores sociales nacionales, al tiempo que señalaba la incorporación de otros actores económicos, de carácter internacional, en la espinosa articulación entre política y economía. Sin embargo, en las últimas décadas, a la luz de las nuevas condiciones de dominación económico-financieras, estos procesos cobraron gran envergadura y dimensión, hasta llegar, para decirlo con términos de Guillermo O'Donnell (2001), a "un grado y un tipo de dependencia que no soñaron siquiera los más pesimistas textos sobre la dependencia escritos hace algunas décadas".

Cierto es que este escenario tenía como telón de fondo la "década perdida", signada por la crisis estructural del modelo nacional-popular, visible en el incremento de la deuda externa, la alta inflación, la pauperización creciente y, al final de los 80, los episodios hiperinflacionarios. Con todo, el reconocimiento de la crisis no habilitaba como única salida, y mucho menos como la más adecuada a los intereses de la mayoría de la sociedad, aquella que finalmente habría de adoptarse, a saber, la "solución neoliberal".

Ahora bien, en la Argentina, en el contexto de la nueva dependencia, la salida neoliberal se tradujo en la implementación de un programa drástico de reformas estructurales que, acompañado y facilitado por la instalación de un nuevo modelo de dominación política, terminó produciendo una fuerte mutación y reconfiguración de la sociedad.

En efecto, cambios de toda índole, algunos ya anunciados desde mediados de los 70, encontraron una inflexión hiperbólica en el marco de la política neoliberal puesta en marcha por Carlos Menem (1989-1999) y continuada por sus sucesores. En este nuevo marco social, atravesado por una fuerte dinámica de polarización, todas las clases sociales sufrieron grandes transformaciones. Mientras que los grupos pertenecientes a la cúspide de la sociedad aunaron alta rentabilidad económica y confianza de clase al encontrar en su adversario histórico —el peronismo— un aliado inesperado, una gran parte de la sociedad, perteneciente a las clases medias y populares, experimentó una drástica reducción de sus oportunidades de vida. Aun así, el proceso no fue, de ningún modo, homogéneo, pues si bien es cierto que amplias franjas de las clases medias experimentaron el empobrecimiento y la caída social, otras se acoplaron con mayor éxito al modelo y buscaron afirmar la diferencia por medio del consumo y los nuevos estilos de vida. Por último, las clases trabajadoras, cuya identidad político-social se había estructurado desde y a partir del primer peronismo, atravesaron un proceso de descolectivización que arrojó a la situación de marginalidad y exclusión a vastos sectores, por vía del trabajo informal y el desempleo.

En suma, la dinámica de polarización y fragmentación social adquirió tal virulencia que durante gran parte de la década de los 90 hubo grandes dificultades en dotar de un lenguaje político a las experiencias de descolectivización, en la cual se entremezclaban diferentes trayectorias y situaciones, además de sentimientos contradictorios y ambivalentes respecto de la nueva condición social. No era para menos; la mutación era no sólo económica, sino también social y política.

En realidad, durante la década del 90, los cambios fueron reflejando rápidamente la configuración de un nuevo "campo de fuerzas societal", noción que tomamos de Edward Thompson (1986), y que designa menos una estructura ya consolidada que un proceso atravesado por dos grandes tendencias, suerte de polos magnéticos que arrastran de manera irresistible a los diferentes grupos sociales hacia uno u otro extremo, hacia la adquisición de posiciones ventajosas o hacia la descalificación social; en el lenguaje de los actores sociales, hacia la "salvación" o hacia la "caída". El país nos devolvía así la imagen de una sociedad

en pleno estallido, polarizada, en medio de una dinámica vertiginosa y, a la vez, muy inestable. Sin embargo, con los años, lejos de constituir un movimiento pasajero, la doble dinámica de polarización y fragmentación fue moldeando los contornos más duros de un nuevo país, de una *sociedad excluyente*, estructurada sobre la base de la cristalización de las desigualdades tanto económicas como sociales y culturales.

Este libro se propone abordar algunas de las dimensiones principales de ese proceso de mutación y reconfiguración estructural vivido por la Argentina en los 90, con una óptica que privilegia el análisis de la sociología política. Su objetivo es describir, en la medida de lo posible, los contornos generales de la sociedad excluyente. Para dar cuenta de ello, hemos decidido dividir nuestro análisis en tres partes, cada una de ellas compuesta por tres capítulos. En la primera parte, titulada "La gran mutación", iniciamos el recorrido presentando las diferentes dimensiones del proceso de mutación estructural, a fin de instalarnos luego en el terreno propio de la sociología política, a saber, a través del análisis del modelo de dominación política y sus avatares, así como de las transformaciones en las figuras de la ciudadanía. Aunque conscientes de que estas vías de entrada están lejos de agotar el conjunto de mutaciones políticas que atraviesa la sociedad argentina de las últimas décadas, creemos que el análisis propuesto nos facilitará algunas de las claves conceptuales que nos servirán de guía para abordar y comprender los núcleos problemáticos que componen la segunda y la tercera parte de este libro.

La segunda parte está consagrada al estudio de "La nueva configuración social". Para ello, nos proponemos pasar revista al proceso de dislocación y transformación de las diferentes clases sociales, en un contexto que señala el pasaje de la gran mutación a la consolidación de una sociedad excluyente. Así, comenzaremos con un análisis de las continuidades y rupturas de los sectores dominantes, para adentrarnos luego en la dinámica de fragmentación de las clases medias y, por último, avanzaremos en el relato de los procesos de pauperización y territorialización de las clases populares. Aquí, nuestro análisis apunta a detectar y poner de manifiesto la nueva dialéctica que se establece entre estructuras y prácticas sociales, en un escenario marcado por un fuerte incremento de las asimetrías económicas, sociales, culturales y políticas.

En la tercera y última parte abordamos el estudio de la acción colectiva y sus diferentes inflexiones. Sin pretender exhaustividad, nuestro propósito apunta a dar cuenta, con la ayuda de algunos casos emblemáticos, de las formas de resistencia propias del período, en las cuales se alternan y entremezclan viejos y nuevos actores sociales, así como nuevos escenarios y diferentes escalas de la conflictividad emergente. En fin, en un marco por demás complejo y atravesado por diferentes modalidades de acción colectiva, nos proponemos aprehender los sentidos y formas que adopta la resistencia a un modelo de exclusión, leída no sólo como una mera respuesta reactiva, sino también como una apuesta política de creación de nuevos lazos sociales. En este sentido, nuestra reflexión busca emplazarse en una perspectiva que señala la doble dinámica y vitalidad de lo social, a saber, la compleja dialéctica que es posible establecer entre fases y procesos de descomposición y de recomposición social.

2

Antes de iniciar nuestro recorrido, queríamos realizar algunos comentarios sobre el carácter y sentido de este libro. En primer lugar, deseamos dejar constancia de que en él se sintetiza y reelabora gran parte de las investigaciones que hemos venido desarrollando en los últimos diez años de nuestra carrera académica, en el marco de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Para comenzar, esta reelaboración contempla una serie de investigaciones realizadas entre 1995 y 1997, las cuales nos permitieron dedicarnos a esa recurrente tarea de la sociología argentina de los últimos sesenta años que consiste en interpretar una y otra vez las transformaciones y significaciones del peronismo. Esta primera investigación sobre la Argentina de los 90, realizada juntamente con Danilo Martuccelli, apuntaba a dar cuenta de las mutaciones de la vida política y el descentramiento de las imágenes del peronismo en la memoria colectiva, mediante el estudio pormenorizado de las subjetividades de los actores sociales (militantes políticos, mundo sindical, subjetividades populares). Poco después, dicha investigación nos llevó a profundizar la lectura de

los procesos de desestructuración del mundo del trabajo, principalmente a través de las diferentes transformaciones operadas en el mundo de los trabajadores metalúrgicos, protagonistas emblemáticos del modelo nacional-popular.

Hacia 1999, dirigimos nuestra atención hacia los nuevos fenómenos de segregación urbana, a partir del estudio de las urbanizaciones cerradas. Ello nos permitió adentrarnos en el análisis de ciertos cambios generales ligados a las clases medias y altas, sobre todo en lo que respecta a estilos de vida, espacios de sociabilidad, modelos de socialización y figuras de la ciudadanía. Asimismo, nos parecía que esta vía posibilitaba realizar una primera aproximación a la otra cara del proceso de fragmentación de las clases medias (la dinámica ascendente), la cual buscaba complementar aquellas lecturas emprendidas por nuestros colegas de área en la UNGS, centrada en los procesos de empobrecimiento y caída social, así como en el desarrollo de nuevas estrategias de supervivencia (el trueque). Por último, esta inmersión en la vida en los *countries* y barrios privados, en la cual participó un equipo formado por jóvenes investigadoras de la UNGS, nos permitió sopesar la magnitud de los cambios culturales y sociales vividos en la época del menemismo.

En noviembre de 2001, luego de la publicación del libro *Los que ganaron*, Juan Carlos Torre me sugirió la idea de escribir un texto sobre la sociedad argentina actual. Aunque en aquel momento la sugerencia despertó un sinnúmero de interrogantes acerca de su factibilidad y pertinencia, lo cierto es que no contaba con la energía suficiente como para emprender tan desafío y, a decir verdad, tampoco me atraía la idea de continuar instalada dentro de aquel campo que el propio Torre designaba con el acertado título de “sociología y antropología de la descomposición social”. Meses después, los avatares de la propia historia política argentina nos llevaban hacia lugares impensados y nuevas inflexiones político-académicas. En efecto, en febrero de 2002 iniciamos el estudio y acompañamiento de la acción colectiva protagonizada por los desocupados y las asambleas barriales. Así, durante aquel año extraordinario realizamos junto con Sebastián Pereyra y parte del equipo de Ciencias Sociales de la UNGS una suerte de inmersión en los senderos de aquella Argentina desvertebrada, en especial, por aquellas provincias y lu-

gares del interior que, habiendo conocido épocas de esplendor, habían sufrido los efectos devastadores de la política de privatizaciones y el desmantelamiento de sus economías regionales. El viaje incluyó muchos otros largos recorridos por el ancho y desindustrializado Conurbano Bonaerense, ahí donde al decir de algunos reside el verdadero corazón de la nueva cuestión social argentina. Necesario es decir que, pese a que en los últimos tiempos hemos comenzado a explorar otras vías y experiencias de la acción colectiva, el recuerdo imborrable de aquellos viajes —verdaderos “viajes de ida”— no han cesado de acompañarnos.

En mayo de 2004 recibí un llamado de la editora Julia Saltzmann, quien llegó con la propuesta de un libro que pudiera sintetizar los cambios ocurridos en la sociedad argentina contemporánea, un libro que de alguna manera diera cuenta de “ese nuevo país”, tan diferente del de nuestros mayores y tan distante de nuestras primeras experiencias de socialización. Finalmente, me decidí a emprender el nuevo viaje, a sabiendas de que el desafío era enorme y de que hasta ese momento sólo contaba con una hoja de ruta a medio armar. Por ello mismo, en el camino, me aboqué a una intensa búsqueda bibliográfica sobre lo que se había escrito acerca de los 90, en especial, lo referido a las transformaciones económicas y políticas. Releí así aquellos textos que forman parte de la tradición crítica, y descubrí otros tantos no menos valiosos. Ellos me ayudaron no sólo a recuperar parte de aquel increíble clima social que caracterizó la mutación estructural experimentada en los 90, sino también a asentar una suerte de conversación continua y enriquecedora con otras épocas y otros contemporáneos. Así, son múltiples los libros y autores que me acompañaron en el proceso de mapeo de la nueva sociedad argentina; que, en definitiva, me orientaron tanto en las preguntas como en la escritura, como bien podrá advertir el lector por el título y, sobre todo, en el desarrollo mismo de esta obra. Si sus nombres aparecen una y otra vez, no es sólo porque una obra como ésta, que aspira a una cierta síntesis, termina siendo necesariamente una suerte de producción colectiva, sino también porque los argumentos centrales desarrollados en estas páginas apuntan a inscribirse y a subrayar la existencia —pese a la discontinuidad— de una tradición crítica en las ciencias sociales argentinas. En este sentido, más allá de los resultados concre-

tos de este libro, esto último me reveló hasta qué punto la existencia de un legado crítico en las ciencias sociales puede traducirse en un “efecto de acumulación positiva”, cuando éste alimenta y produce nuevas preguntas e investigaciones.

Este libro no hubiera sido posible sin el apoyo del equipo de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias de la UNGS, que codirijo con Inés González Bombal y Gabriel Kessler. Por ello, quiero agradecer los comentarios y sugerencias realizados por Pablo Bonaldi, Carla del Cueto, Damián Corral, Mariana Barattini, Pedro Núñez, Carla Grass, Marina García, Gabriela Wiczkyer, Lorena Bottaro y Lucía Canel. Una vez más, agradezco la pertinencia de las correcciones y las sugerencias de Mariana Luzzi, así como la infinita paciencia con la cual leyó las distintas partes de este manuscrito. Agradezco a Marina García la colaboración, siempre diligente y afectuosa, en la búsqueda por momentos febril de material bibliográfico.

Quiero agradecer muy especialmente a Inés González Bombal y Gabriel Kessler, no sólo por el apoyo irrestricto que me ofrecieron, aun en los momentos más difíciles, cuando todo parecía tambalear frente a la vastedad de la tarea, sino también por la generosidad intelectual con la cual siguieron el proceso de escritura de este libro, haciéndome sugerencias, proponiéndome explorar nuevas vías, abrir nuevos canteros, integrar bibliografía olvidada o simplemente ignorada, en fin, incluir observaciones que dieran con el matiz justo que requería el abordaje de ciertas temáticas.

Agradezco a Roberto Bisang, Cristina García y Valeria Hernández, por haberme ayudado a comprender algo del nuevo mundo de la agroindustria argentina. A Pierre Salama, por sus comentarios sobre nuestro país, siempre incisivos y cargados de una rica perspectiva comparativa. A Ana Castellani, por haber puesto generosamente a mi disposición distintos materiales (algunos inéditos) sobre los sectores dominantes, de los cuales hay tan poca investigación en nuestro país. A Pablo Bergel, porque el diálogo y la discusión que mantenemos desde hace tres años me han ayudado a enriquecer la visión sobre los movimientos sociales. Al equipo de “Trabajo y Mundialización” del IRD, de París, en especial a Monique Selim, por el apoyo incondicional que me brindan en cada una de mis largas estadías en Francia, como investigadora invitada de aquella institución.

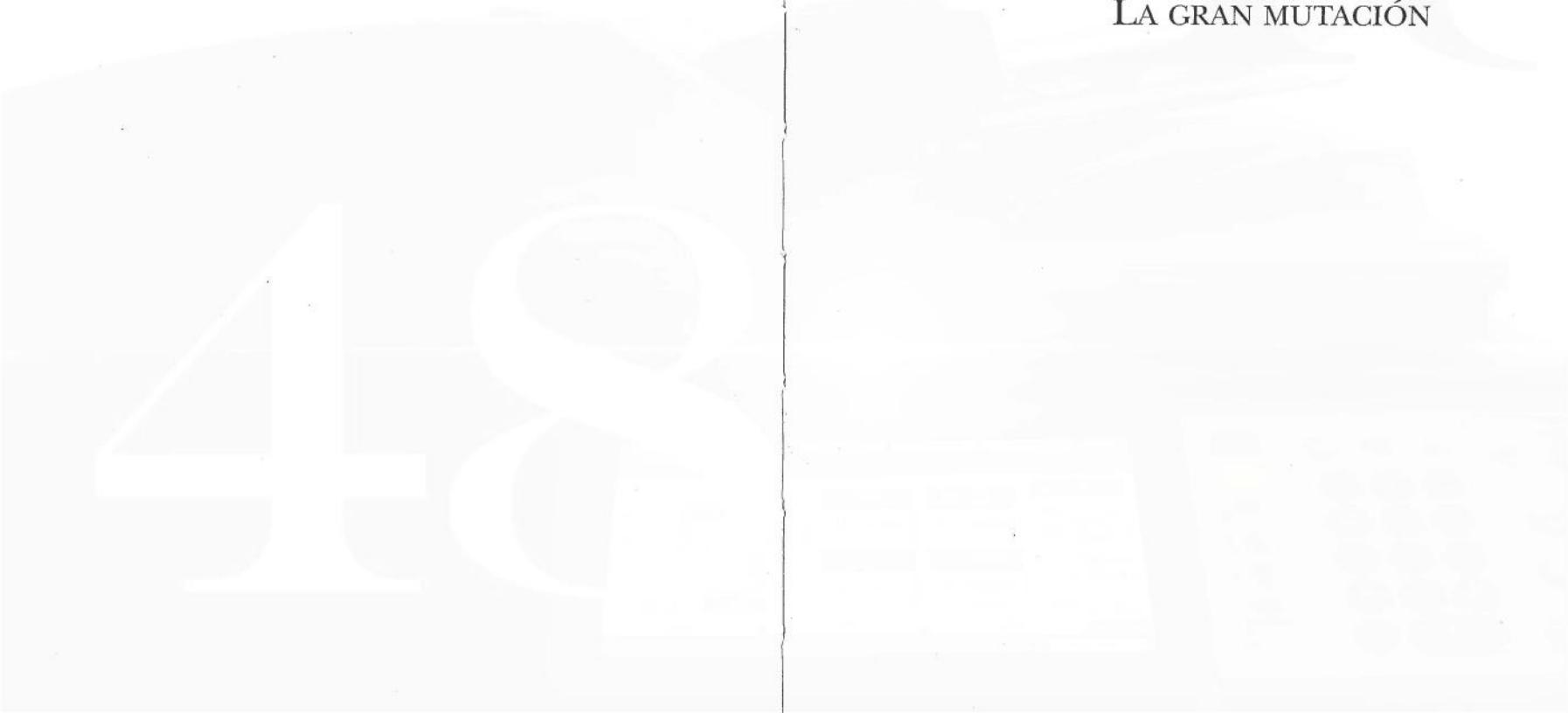
Sin duda, si este libro mejoró sustancialmente entre el primer borrador y la versión definitiva, ha sido gracias a todos ellos. Huelga decir que las omisiones, desaciertos e incompletitudes que seguramente hay, son, por supuesto, absoluta responsabilidad de la autora.

* * *

El relato aquí presentado propone un recorrido que privilegia un análisis desde la sociología política: así, en primer lugar, realizamos el trazado de las mutaciones económicas, políticas y sociales que hicieron posible la emergencia de otra sociedad. Luego nos adentrarnos en el análisis de la dialéctica entre estructuras y prácticas sociales, mediante el estudio de las transformaciones de los diferentes grupos o clases sociales. Por último, el recorrido propone terminar con el estudio de las formas de acción colectiva, que involucran la acción de diferentes actores sociales, desde 1989 hasta el presente.

En fin, digamos que este libro está lejos de pretender dar una visión exhaustiva de los procesos sociales y políticos vividos por la Argentina a partir de 1989, lo cual no sólo sería una tentativa vana, sino que además le restaría pertinencia al enfoque que buscamos desarrollar en estas páginas. Con todo, somos conscientes de que un abordaje de esta naturaleza nos distancia de la tendencia dominante de la sociología argentina, poco proclive a la construcción de relatos con cierta vocación integradora. Aun así, creemos que los cambios han sido de tal envergadura, la eclosión de significados tan grande, que bien valía la pena correr el riesgo, a fin de realizar el trazado de las distintas vías, los núcleos de tensión, los nuevos entramados y ramificaciones de lo que hemos dado en denominar “la sociedad excluyente”. En suma, más allá de las ausencias inevitables, estoy convencida de que el sentido último de un libro está dado menos por las respuestas que pueda aportar que por los nuevos caminos que su dinámica y su propia incompletud sugieren o abran.

*Maristella Svampa,
31 de julio de 2005.*



PRIMERA PARTE

LA GRAN MUTACIÓN

CAPÍTULO 1

HACIA EL NUEVO ORDEN NEOLIBERAL

La hiperinflación constituyó así el momento resolutivo en la interminable agonía, que llegaba a su término, para la sociedad forjada por la revolución peronista. [...] Este fin fue también un principio; el principio de los días que estamos viviendo. A la memoria de esta experiencia debe su fuerza el orden socio-económico y político que hoy vemos perfilarse; es ese recuerdo aleccionador el que da a las mayorías la fuerza necesaria para soportar la ostentosa indiferencia de los sectores privilegiados por las penurias que siguen sufriendo los que no lo son y ofrecer su resignada aquiescencia a la progresiva degradación de las instituciones cuya restauración celebraron con tan vivas esperanzas hace diez años.

Tulio Halperin Donghi,
La larga agonía de la Argentina peronista.

LOS MOMENTOS DE LA MUTACIÓN ECONÓMICA

Durante décadas, en la Argentina imperó un modelo de integración de tipo nacional-popular, cuya máxima expresión fue el primer peronismo (1946-1955). Este modelo se caracterizaba por tres rasgos mayores. En primer lugar, en el plano económico, presentaba una concepción del desarrollo vinculada a la etapa de sustitución de importaciones y la estrategia mercado-internista. En segundo lugar, implicaba el reconocimiento del rol del Estado como agente y productor de la cohesión social, principalmente por medio del gasto público social. Esta política se tradujo así en la ampliación de la esfera de la ciudadanía, a través del reconocimiento de los derechos sociales, expresados paradigmáticamente en el artículo 14 bis de la Constitución nacional. Por último, una tendencia a la homogeneidad social, visible en la incorporación de una parte importante de la clase trabajadora, así como la expansión de las clases medias asalariadas.

El desmantelamiento de este modelo societal, luego de largos avatares políticos y tergiversaciones no menores, y su reem-

plazo por un nuevo régimen, centrado en la primacía del mercado, conoció diferentes momentos. En realidad, el proceso de instalación de un nuevo orden liberal estuvo lejos de ser lineal o de registrar una secuencia única. De manera esquemática, podríamos afirmar que los cambios en el orden económico arrancan durante la década del 70, a partir de la instalación de regímenes militares en el cono sur de América Latina; las transformaciones operadas en la estructura social comenzarían a tornarse visibles en la década del 80, durante los primeros años del retorno a la democracia; por último, podemos situar los cambios mayores a fines de los 80 y principios de los 90, con la gestión menemista.

En rigor, el cambio en el régimen de acumulación conoció un primer intento con el “Rodrigazo”, bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón (1974-1976). Recordemos que, pese a la brevedad de su gestión, el ministro de Economía Celestino Rodrigo (1975), marcó una inflexión de talla, pues aplicó drásticas medidas de ajuste que implicaron una devaluación del 100% y un aumento de las tarifas de los principales servicios públicos que, en algunos casos, llegó al 200%. Impulsado por el ministro José López Rega, el plan de Rodrigo implicaba una reorientación fundamental de la economía, pues apuntaba a poner fin a la política económica nacionalista y reformista, característica del peronismo, para dar paso a una política de estabilización y ajuste, asentada en una alianza con los grupos económicos. Sin embargo, esta primera tentativa por cambiar el régimen de acumulación encontró grandes escollos en las movilizaciones populares espontáneas que paralizaron el país y culminaron en una huelga general decretada por la CGT, lo cual determinó no sólo el final abrupto del plan de ajuste, sino la suerte del hombre fuerte del régimen, López Rega, quien tuvo que renunciar y abandonar el país.

La segunda tentativa arrancaría de manera decidida con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Como en otros países de América Latina, el objetivo de la dictadura militar argentina fue llevar a cabo una política de represión, al tiempo que aspiraba a refundar las bases materiales de la sociedad. En consecuencia, el corte que introdujo fue doble: por un lado, mediante el terrorismo de Estado, apuntó al exterminio y disciplinamiento de vastos sectores sociales movilizados; por otro lado, puso en marcha un programa reestructuración económi-

co-social que habría de producir hondas repercusiones en la estructura social y productiva.

Las consecuencias económicas y sociales de estos procesos fueron devastadoras. El nuevo régimen de acumulación supuso la puesta en marcha de un modelo asentado en la importación de bienes y capitales y en la apertura financiera. Estas medidas implicaban la interrupción de la industrialización sustitutiva (visible en la erosión de la producción interna), y propiciaban el endeudamiento de los sectores público y privado (reflejado en el aumento espectacular de la deuda externa, que en el período 1976-1983 pasó de 13 mil millones a 46 mil millones). Asimismo, la lógica de acumulación desencadenada por este proceso centrado en la valorización financiera apuntó también a liquidar las posibilidades de una coalición nacional-popular, al tiempo que fue sentando las bases de un sistema de dominación centrado en los grandes grupos económicos nacionales y los capitales transnacionales, que finalmente terminaría de concretarse en 1989, a partir de la alianza política entre estos sectores y el peronismo triunfante.

El proceso de desindustrialización iniciado por la dictadura militar produjo importantes cambios en la estructura social argentina, anticipando su “latinoamericanización”, a través de la expulsión de mano de obra del sector industrial al sector terciario y cuentapropista, y la constitución de una incipiente mano de obra marginal. Asimismo, el deterioro de los salarios reales y la baja de la producción produjeron la contracción de la demanda interna, lo cual fue acompañado por el fuerte incremento de las disparidades intersectoriales. Por último, la eliminación de las negociaciones colectivas y la caída del salario impactaría negativamente en la distribución del ingreso.

Recordemos que en 1974, en la Argentina, la distribución de la riqueza era similar a la de muchos países desarrollados: los ingresos del 10% más rico eran 12,7 veces mayor que el del 10% más pobre. En realidad, la falta de difusión de indicadores socio-económicos durante el régimen militar, a lo que siguió la profundización del deterioro de las condiciones de vida de franjas importantes de los sectores medios y populares, explican que sólo hacia mediados de los 80, con el retorno a la vida constitucional, gran parte de la sociedad tomara conciencia de la

dimensión de los cambios producidos. Más aún, este cuadro económico-social no tardó en poner de manifiesto el aumento de las desigualdades, visible en el incremento de la llamada "pobreza estructural", así como en la aparición de una "nueva pobreza" que afectaría a los sectores medios y medios-bajos.

Las cifras de la época son más que elocuentes, como lo refleja la distribución del ingreso per cápita de los hogares entre 1974 y 1989. Así, el 30% de los hogares de ingresos bajos pasó del 12,4% del ingreso en 1974 al 7,3% en 1989; los ingresos medios, en los cuales se comprende el 60% de los hogares, pasaron a su vez del 60,7% en 1974 al 51,1% en 1989; finalmente, los hogares con ingresos altos, el 10% del total, pasaron de concentrar el 27% en 1974 al 41,7% en 1989 (Beccaria:2001). Asimismo, el total de nuevos pobres en el Conurbano Bonaerense pasó del 4,2% en 1980 a 12,3% en 1987.

Ahora bien, aunque la dictadura logró crear las bases de un nuevo orden económico, ello no significa que no haya habido luego tentativas de reorientar el sistema hacia una economía productiva. Así, durante los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), en medio de la efervescencia democrática, hubo ciertos ensayos que, aunque limitados, se propusieron reorientar el desarrollo, acorde al modelo de acumulación precedente. Dichas tentativas se dieron en el marco de la crisis de la deuda externa que sacudió a gran parte de los países latinoamericanos a partir de los años 80 (la "década perdida", según la Cepal), y en un contexto de aumento de las demandas y expectativas populares. Sin embargo, pese a sus proclamas iniciales, que prometían desde la renovación de las estructuras sindicales hasta una democracia sustantiva, como en tantos otros temas el nuevo gobierno constitucional no contó con el coraje político ni tampoco con las alianzas necesarias para ir hasta el fondo de la cuestión.

Por un lado, las acciones del gobierno de Raúl Alfonsín dejaron entrever una debilidad creciente en relación con los poderosos sindicatos peronistas. En efecto, en 1987 el gobierno tuvo que retroceder en su propuesta de reforma sindical y nombrar como ministro de Trabajo a un hombre procedente de las filas del sindicalismo. Por su parte, la CGT, conducida por el sector ubaldinista, continuó desarrollando una fuerte capacidad

de presión, ilustrada de manera elocuente por los trece paros generales realizados entre 1984 y 1988.

Hacia fines de los 80, envuelto en una serie de conflictos económicos e institucionales, el país se hundía cada vez más en una grave crisis económica, reflejada en la importante caída de la inversión interna y extranjera, la creciente fuga de capitales y el récord inflacionario, que en 1987 alcanzaría el 175% y en 1988, el 388%. Finalmente, el gobierno de Alfonsín naufragaría sin dar con la clave de la constitución de una nueva alianza político-económica, que apuntara tanto a consolidar el recobrado marco institucional como a sanear una economía severamente deteriorada. La disociación entre, por un lado, una democracia representativa, orientada hacia la consolidación del marco institucional y el respeto de las reglas de juego entre los partidos políticos y, por otro, una democracia sustantiva, basada en la articulación entre solidaridad y demandas de justicia social, se tornaba cada vez más evidente. La debacle del Plan Austral —que en sus comienzos había contado con un alto apoyo popular— y la entrada en un período de alta inflación, culminarían en la crisis hiperinflacionaria de 1989, impulsada en parte por los grandes grupos económicos (el "golpe del mercado"). Estos sucesos determinarían el retiro anticipado de Alfonsín, quien había accedido al poder en 1983, avalado por el 52% de los sufragios, en medio de grandes expectativas de renovación política y económica.

Así las cosas, la Argentina de principios de los años 90 era una sociedad empobrecida y atravesada por nuevas desigualdades, que ya había experimentado una primera gran desilusión respecto de las promesas sustantivas de la democracia. El país asistía a la crisis estructural del modelo nacional-popular, sin por ello descubrir la fórmula, a la vez económica y política, que permitiera reencontrar las claves perdidas de la integración social. Sin embargo, aunque el incremento de la heterogeneidad y la polarización social anunciaban los contornos de un país diferente del de antaño, la gran mutación se consumaría durante el tercer momento de la secuencia, esto es, durante el largo gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1999.

1989: EL FINAL DE UN CICLO POLÍTICO Y ECONÓMICO

El año 1989 significó el final de un ciclo político-económico, tanto en el nivel nacional como en el internacional. En el nivel internacional, en 1989 colapsaron los socialismos reales, proceso ilustrado de manera elocuente por la caída del Muro de Berlín. El hecho terminaba abruptamente con la división más emblemática de la guerra fría, al tiempo que anticipaba, tras la rápida reunificación de las dos Alemanias, el triunfo avasallador del ideario capitalista. Meses más tarde, la debacle de Rumania, una de las repúblicas comunistas más pobres del Este europeo, cerraba el año, con el juicio y ejecución de los Ceaucescu, cuya transmisión televisiva en directo sería seguida por el mundo entero. El espectacular fin del mundo bipolar abrió un amplio espacio político-ideológico que sería ocupado por el neoliberalismo, rápidamente sacralizado en términos de "pensamiento único".

En el contexto de los países latinoamericanos, la situación no era menos grave. La "década perdida" se cerraba con un balance negativo: solamente en los últimos cuatro años el número de pobres en América Latina había registrado una aumento de 25% (Cepal). A principios de 1989, la crisis económica desembocaría en saqueos y revueltas masivas en Venezuela, una de las repúblicas otrora más prósperas, gracias a la riqueza de sus recursos petroleros. Así, el "Caracazo" vendría a acentuar los temores de las élites gobernantes en otros países, también jaqueadas por la crisis de la deuda externa, la inflación galopante y el deterioro de las condiciones de vida de vastos sectores sociales. Pocos meses después, en mayo de 1989, sería el turno de la Argentina, desbordada por la crisis hiperinflacionaria y los saqueos a supermercados, registrados en localidades del conurbano bonaerense y en la ciudad de Rosario.

De manera más específica, en la Argentina, la experiencia de la hiperinflación habría de constituir un punto de inflexión para la historia política nacional. En primer lugar, desde el punto de vista económico, para la gran mayoría de la población la hiperinflación trajo consigo una mayor caída del salario real, la contracción de la actividad económica, la suspensión de la cadena de pagos y el reemplazo de la moneda local por el dólar.

En 1989, los índices de pobreza treparon al 47,3%, y la tasa de indigencia, al 17,5% (Lozano:2005). Asimismo, sólo en ese año, el total de nuevos pobres alcanzó el 23,3% (Minujín y Kessler:1995).

En segundo lugar, la crisis hiperinflacionaria desembocó en el acuerdo entre diferentes actores sociales sobre ciertos puntos básicos, referidos, en especial, al agotamiento de la vía nacional-popular, esto es, del modelo de integración social que el peronismo había puesto en vigencia en 1945, —y que el proyecto alfonsinista, en parte, se había propuesto recrear—, poniendo al descubierto las distorsiones e insuficiencias producidas en cuarenta y cinco años de conflictos y transformaciones. En consecuencia, la hiperinflación terminó por afianzar aquellas posturas que afirmaban la necesidad de una apertura del mercado y un achicamiento radical del Estado.

En tercer lugar, en términos experienciales, la hiperinflación confrontó a los individuos con la pérdida súbita de los marcos que rigen los intercambios económicos, a través de la desvalorización —y desaparición— vertiginosa de la moneda nacional. Más aún, la hiperinflación como experiencia de disolución del vínculo social dejaría profundas huellas en la conciencia colectiva, visibles en la fuerte demanda de estabilidad que recorrería la sociedad argentina durante los años 90. La demanda no tardaría en transformarse en una suerte de mandato irrevocable, que erigiría al régimen de convertibilidad (mediante la paridad entre el dólar y el peso), implementado en 1991, en base y garantía de la nueva sociedad posinflacionaria.

En cuarto y último lugar, la experiencia traumática de la hiperinflación habría de asentar un rudo golpe al imaginario integracionista que, desde los orígenes de la república, había alimentado las prácticas y las representaciones de vastos sectores sociales, incluidas las clases medias y parte de las clases populares. Extenuada y empobrecida, la sociedad argentina asistía al final de un modelo de integración social que, desde los comienzos de la república y más allá de las crisis recurrentes, había asegurado canales importantes de movilidad social ascendente.

Ahora bien, si la crisis hiperinflacionaria apuró el recambio presidencial y sentó las bases para el consenso neoliberal en diferentes sectores sociales, no es menos cierto que 1989 estuvo

signado por otros sucesos, que habrían de tener vastas repercusiones políticas en los años por venir. Uno de ellos tenía que ver con la “cuestión militar”, a saber, con las presiones ejercidas por las fuerzas armadas, que reclamaban que el gobierno pusiera fin a las causas por la violación de los derechos humanos registradas bajo la última dictadura. Esto, sumado a demandas más puntuales de ciertos sectores del ejército que, desde 1987, habían venido alimentando rebeliones sucesivas y rumores de conspiraciones, atentaba contra la frágil institucionalidad del sistema democrático argentino, y aparecía como uno de los legados más problemáticos del gobierno de Alfonsín, cuya cuestionable resolución estaría a cargo de Menem.

Por otro lado, 1989 fue un año que condensó grandes derrotas en el campo de los movimientos sociales. Así, en febrero, un hecho de violencia política sacudió a la sociedad argentina: una fracción del Movimiento Todos por la Patria (MTP) intentó copar el regimiento de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires. El levantamiento tuvo como respuesta una represión sangrienta ordenada por el gobierno alfonsinista, que incluyó además fusilamientos secretos llevados a cabo por el Ejército. Sin embargo, más allá del afán del gobierno por condenar los hechos y congraciarse al mismo tiempo con la cúpula militar, los efectos de La Tablada tuvieron una significación mayor, pues alcanzaron un modelo de militancia que planteaba una continuidad ideológica entre los años 70 y los 80, al articular lo social y lo político. En efecto, aunque incipiente, la experiencia del MTP fue una de las tentativas más importantes de impulsar un proyecto de izquierdá, con verdadera militancia política en los barrios. Necesario es decir que la mayoría de sus militantes no estaba al tanto del aventurerismo revolucionario de Enrique Gorriarán Merlo, líder del levantamiento; otros, probablemente lo sabían, pero naufragaron en la ambivalencia propia de un movimiento que reunía, sin duda de manera heterogénea y hasta contradictoria, elementos o matrices ideológicas de épocas diferentes. El caso es que La Tablada aceleró el proceso de quiebre ideológico de lo que quedaba de la izquierda populista revolucionaria, lo cual se tradujo en el ocaso de un tipo de militancia social y política. A esto se agregaría posteriormente la crisis del MAS (Movimiento al Socialismo), partido de izquierda

trotskista que en los últimos años había registrado una importante inserción sindical. Sin embargo, su implantación en los sindicatos no lograría resistir la ofensiva privatizadora y neoliberal, realizada en medio de la conversión vertiginosa de amplios sectores del peronismo histórico.

Por si esto fuera poco, en octubre de 1989 el nuevo gobierno de Menem firmó el primero de los dos decretos que otorgaban la amnistía a la cúpula militar, anteriormente condenada por crímenes de lesa humanidad, así como a los altos dirigentes de Montoneros, la organización armada peronista más importante —y más controvertida— de los años 70. Dichos decretos venían a convalidar la tesis de los “dos demonios”, fraguada durante los primeros años de democracia, que repartía iguales responsabilidades por lo sucedido durante los “años de plomo”, al terrorismo de Estado y a las organizaciones guerrilleras (y tendía a incluir, de manera más extensa, al conjunto del espacio militante).

Los indultos, que complementaban aquellas ya firmados por Alfonsín, concitaron una oposición generalizada, no sólo de los organismos de derechos humanos, sino también de vastos sectores de la sociedad. Hubo una gran movilización que, como en los primeros tiempos de la democracia, logró concentrar centenares de miles de personas; las encuestas de la época indicaban un amplio repudio de la sociedad, que rozaba el 75% (Cerruti y Ciancaglini:1992, p. 238), pero, sin embargo, nada pudo torcer la particular política de “pacificación” asumida por el nuevo presidente peronista. En consecuencia, este conjunto de hechos diferentes pondría de manifiesto una inflexión en los sistemas de acción colectiva, lo cual sería corroborado luego tanto por la desmovilización y fragmentación de las organizaciones de derechos humanos, como por la crisis de un tipo de militancia política en los barrios populares. La época que se abría revelaría una concepción diferente respecto de la relación entre lo social y lo político, en el marco de un nuevo modelo, marcado por el desdibujamiento de los antagonismos políticos y el aumento de la polarización social.

En suma, luego de 1989, la sociedad argentina cambió ostensiblemente. Tras la imagen de un país devastado, la crisis del vínculo social experimentada durante la hiperinflación dejó

la puerta abierta, demasiado abierta, para la realización de las transformaciones radicales llevadas a cabo durante la larga década menemista.

EL NUEVO ORDEN NEOLIBERAL

A nadie escapa que la institucionalización creciente del sistema partidario en la Argentina desde 1983 contrasta con el largo proceso de inestabilidad institucional y polarización política que caracterizó a la Argentina a partir de 1955. Ahora bien, dicha institucionalización debe interpretarse en el marco de las especificidades del caso argentino, tradicionalmente caracterizado por un sistema político débil, y, como en otros países latinoamericanos, por una fuerte articulación entre el sistema político, los actores sociales y el Estado. Asimismo, esta situación expresaba una suerte de anomalía: cuanto más fuertes eran los grupos sociales, menor parecía ser su expresión orgánica a través de los partidos políticos. Esto se debía, por un lado, a que los sectores conservadores argentinos nunca pudieron consolidar un partido de derecha fuerte y, por ende, recurrián, para canalizar sus intereses sectoriales, a la intervención de los militares; por otro lado, los sectores populares lograron su representación por medio de partidos-movimientos (el yrigoyenismo, pero, sobre todo, el peronismo), en los cuales el rol y la autonomía del partido político propiamente dicho aparecía como particularmente débil con relación al conductor carismático y, en el caso del peronismo, hacia las corporaciones sindicales. Para muchos, por ende, para ingresar en un verdadero modelo de representación política de intereses sociales era necesario diferenciar estos niveles, a fin de posibilitar una verdadera articulación entre lo social y lo político.

Cierto es que la progresiva institucionalización del sistema político partidario no se dio sin inconvenientes, entre los cuales hay que destacar tanto las rebeliones militares producidas durante el período de Alfonsín y el primer año del gobierno de Menem, como la constante presión de los grupos económicos, dramáticamente ilustrada por el primer brote hiperinflacionario de 1989, considerado por algunos como un verdadero “gol-

pe de mercado”. Sin embargo, lo propio del período que se abre en 1983 y, sobre todo, a partir de 1987, es el acercamiento cada vez mayor entre los sectores económicamente dominantes y los partidos políticos mayoritarios. En realidad, desde el punto de vista de los sectores dominantes, la apertura democrática trajo consigo un cambio importante de perspectiva política, a partir del abandono de las posiciones golpistas y la aceptación de las nuevas reglas de juego. Este proceso, que tenía como trasfondo la convicción de que la corporación militar había dejado de ser el canal más apropiado de sus intereses económicos (Acuña:1995), también daba cuenta de la existencia de una suerte de mandato “democrático” que recorría el subcontinente, avalado por Estados Unidos y los organismos internacionales. Ello nos permite comprender por qué, de ahí en más, la acción de los sectores dominantes se orientará a la colonización de los dos grandes partidos políticos existentes, a través de la infiltración del discurso económico liberal, como eje de la solución de los problemas argentinos. Este discurso tomaría un nuevo alcance, luego del fracaso ostensible del Plan Austral, en 1987, momento en el cual los sectores dominantes comenzaron a desarrollar una campaña sistemática en favor de la necesidad de realizar profundas reformas estructurales (Beltrán:1999, p. 75).

Recordemos que en 1983, la política liberal, uno de los puntos centrales del programa económico-social de la dictadura militar, era fundamentalmente sostenida por los grandes grupos económicos y los partidos de inspiración liberal, estrechamente vinculados con aquélla. Sin embargo, hacia fines de los 80, este discurso pasó a formar parte de la plataforma político-económica del entonces candidato a la presidencia por el partido radical, Eduardo Angeloz, revelando con ello los resultados exitosos de una estrategia de acercamiento y seducción de los sectores dominantes hacia los partidos mayoritarios. Finalmente, la puesta en marcha de un nuevo programa liberal, mediante la alianza entre importantes grupos socioeconómicos y el gobierno democrático, se tornaría posible con la asunción del nuevo presidente justicialista de la Argentina, Carlos Menem.

Sin embargo, a fines de los 80 no fueron pocos los observadores políticos que retomaron la categoría “populismo” para

caracterizar las propuestas de los candidatos presidenciales en países tales como la Argentina, Brasil, Perú, Venezuela y México. En realidad, el escenario político-electoral latinoamericano, que daba cuenta tanto de las limitaciones como de la crisis estructural del modelo nacional-popular, estaba atravesado por demandas ambivalentes y hasta contradictorias. Por un lado, frente a las crecientes dificultades económicas y la crisis de los mecanismos tradicionales de cohesión social, así como a la destrucción de las solidaridades sociales, el llamado populista emergía, una vez más, como una tentativa de "restitución" del progreso a las mayorías, por vía de una política nacional-popular. Por otro lado, esta demanda de revinculación iba acompañada también por una no menos fuerte exigencia de eficacia y ejecutividad, necesarias para enfrentar la crisis e imponerse por sobre los intereses de los diferentes sectores en pugna.

Sobre este telón de fondo se abre la experiencia de Menem, que refleja cabalmente esas demandas contradictorias. Así, aunque su campaña electoral se fundó en el llamado populista, Menem terminó construyendo una nueva alianza político-económica que le permitió dar cauce a la demanda de ejecutividad, mediante una estrategia liberal, orientada a la deslegitimación y desmantelamiento completo del modelo nacional-popular, sin que por ello las promesas electorales o la supuesta vocación popular del partido justicialista se convirtieran en un verdadero obstáculo.

La entrada en un nuevo orden liberal puso fin a la recurrente distancia existente entre sistema de poder y sistema político, que tantos analistas señalaron como una de las fuentes de la inestabilidad y polarización política en la Argentina. La larga etapa de los "empates sociales", que había caracterizado al país a partir de 1956, signada cada vez más por la acentuación de la crisis del modelo nacional-popular e ilustrada por las feroces pujas entre diversas concepciones de la economía, la sociedad y la política, parecía haber llegado a su fin. Se abría una nueva época, marcada a la vez por la polarización y la fragmentación social, así como por la hegemonía de los grupos económicos en alianza con el partido mayoritario.

Claro está que una transformación tan radical del proyecto económico exigió un cambio fundamental en las alianzas polí-

ticas del Partido Justicialista, que dejó de apoyarse masivamente sobre el actor corporativo sindical, como lo había hecho tradicionalmente, para vincularse estrechamente con los sectores dominantes representados por los grandes grupos económicos. Fue esta nueva alianza, en la que se integraron también los representantes políticos del neoliberalismo vernáculo, la que hizo posible la aplicación de la reforma del Estado, a partir del abandono de una política de concertación social y de la asunción de una gestión decisionista.

Sólo tras un período signado por la puesta en escena de las nuevas alianzas económicas (en una primera etapa el Ministerio de Economía fue asignado a un funcionario del grupo económico Bunge & Born) y por un conjunto de planes sucesivos de estabilización económica, se consolidó en el país la liberalización de la economía, a partir del Plan de Convertibilidad y la reforma del Estado. Hubo rumores de desplazamientos y renuncias, y resonantes escándalos de corrupción involucraron a personajes de la familia presidencial, pero en 1991 el régimen logró estabilizarse, con la asunción de Domingo Cavallo en la cartera económica y la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad.

En efecto, el Plan de Convertibilidad, que acompañó las reformas estructurales, produjo una verdadera transformación de las reglas de juego económicas, entre ellas, la paridad entre el dólar y el peso, la restricción de la emisión monetaria, la reducción de las barreras aduaneras, la liberalización del comercio exterior y el aumento de la presión fiscal. También fueron suprimidos los principales mecanismos de control del Estado sobre la economía, en favor de las reglas del mercado, al tiempo que se liberalizó la inversión extranjera en la Argentina.

Así, se logró salir de la espiral hiperinflacionaria aplicando una severa política de ajuste y de estabilización, complementada por una política de apertura del mercado nacional a las importaciones y las inversiones extranjeras. Esta estrategia de shock logró detener la hiperinflación, lo cual contribuyó a recuperar parte de la credibilidad ante los mercados internacionales, al tiempo que facilitó, en los primeros años del Plan de Convertibilidad, la recuperación económica y la reducción de la pobreza. Entre 1991 y 1994 la pobreza descendió —del 47,3% registrado en 1989, en pleno pico hiperinflacionario—, al 19,7%, pero

no volvió a los niveles de la década del 80 (Lozano:2005). Por otro lado, el incremento de la actividad económica alcanzaría el 10,6% en 1991, para ir descendiendo progresivamente a 9,6% en 1992, 5,7% en 1993 y 5,8% en 1994 (Aronskind:2001, p. 57). Asimismo, la adopción de la convertibilidad supuso el abandono de una política monetaria autónoma, lo cual acentuó la dependencia estructural del país frente al mercado internacional y sus sobresaltos coyunturales y no permitió tampoco desarrollar un nivel de competitividad suficiente (Salama:2003).

El nuevo orden impuso un modelo de “modernización excluyente”, como tempranamente lo denominaron Barbeito y Lo Vuolo (1992), impulsando la dualización de la economía y la sociedad. Así, durante la década del 90, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) creció un 28%, el desempleo creció 156,3% y el subempleo, 115,4%. La pauta general fue el incremento de la productividad, con escasa generación de empleo y deterioro creciente de las condiciones laborales. Asimismo, el nuevo modelo modificó la inserción de la economía en el mercado mundial, ya que la apertura a las importaciones condujo a una “reprimarización de la economía”: en este contexto las pequeñas y medianas empresas tuvieron grandes dificultades para afrontar la competencia externa, con lo cual las exportaciones se concentraron ahí donde sus precios se expresaban directamente en dólares (petróleo, gas, producción agrícola) y donde el valor agregado era débil o casi nulo (Salama:2003, p. 9).

En los primeros años, el cambio de modelo económico generó una situación novedosa, visible en la coexistencia de crecimiento económico y aumento de la desocupación. Sin embargo, las limitaciones propias del modelo de modernización excluyente se harían notorias a partir de 1995, momento en el cual el crecimiento se estanca, debido a una combinación de elementos externos (el “efecto Tequila”) e internos (límites en la expansión del consumo interno). Así, en 1995 la proporción de hogares pobres aumentó en un 27% (Lozano:2005), revirtiendo la tendencia decreciente inmediatamente posterior a la hiperinflación de 1989. El inicio de la recesión iría acompañado por un aumento espectacular de la desocupación, que era del 6% en 1990, pero alcanzó un primer pico en

1996, de 18,8%. A partir de 1996, el país logró mejorar sus índices económicos, pero dos años más tarde, en 1998, entró en un período de recesión profunda, que se continuaría durante el breve gobierno de la Alianza, y llevaría al estallido del modelo, hacia fines de 2001. En octubre de 2001, la desocupación pasó a 18,3% y tuvo un segundo pico de 21,5% en mayo de 2002, después del colapso del modelo de convertibilidad. Mientras tanto, la pobreza saltó en 2002 al 54,3%, para descender en el segundo semestre de 2004 al 40%, muy por encima del umbral registrado a lo largo de los 90.

LA “REESTRUCTURACIÓN” DEL ESTADO

El proceso de reestructuración del Estado fue crucial. Según el manual de Jones y Thompson, “*Un modelo para la nueva gerencia*”, el nuevo modelo de gestión se caracteriza por las “5 R: Reestructuración, Reingeniería, Reinvención, Realineación, Reconceptualización”. La primera “R” es fundamental, pues constituye el primer paso de la secuencia. Reestructurar significa “eliminar de la organización todo aquello que no contribuye o aporta valor al servicio o producto suministrado al público, cliente o consumidor. Así, un problema de la reestructuración es la determinación de ‘qué se elimina y qué se retiene’ en función de los objetivos e intereses políticos de los gobiernos” (citado en Zuleta:2003).

El programa de ajuste, basado en la reestructuración global del Estado, puso en vigor una fuerte reducción del gasto público, la descentralización administrativa y el traslado de competencias (salud y educación) a los niveles provincial y municipal, así como una serie de reformas orientadas a la desregulación y privatización que impactaron fuertemente en la calidad y alcance de los servicios, hasta ese momento en poder del Estado nacional. En consecuencia, las reformas conllevaron una severa reformulación del rol del Estado en la relación con la economía y la sociedad, lo cual trajo como correlato la consolidación de una nueva matriz social caracterizada por una fuerte dinámica de polarización y por la multiplicación de las desigualdades. Por otro lado, la desregulación de los mercados,

acompañada de la introducción de nuevas formas de organización del trabajo, produjo la entrada en una era caracterizada por la flexibilización y la precariedad laboral y una alta tasa de desempleo.

Así, a lo largo de los 90, la dinámica de consolidación de una nueva matriz estatal se fue apoyando sobre tres dimensiones mayores: el patrimonialismo, el asistencialismo y el reforzamiento del sistema represivo institucional. El primer rasgo alude a las características que asumió el proceso de vaciamiento de las capacidades institucionales del Estado, como producto de la drástica reconfiguración de las relaciones entre lo público y lo privado. De manera más precisa, el patrimonialismo se vincula con la total pérdida de la autonomía relativa del Estado, a través del carácter que adoptaron las privatizaciones. Recordemos que la dinámica privatizadora envolvería vastas áreas del Estado. Agreguemos a esto que a principios de los 80, el Estado estaba presente de manera parcial o total en aproximadamente mil firmas, aunque solamente 14 de ellas (entre las cuales estaban YPF, Segba, Gas del Estado y Aerolíneas Argentinas) representaban entre dos tercios y tres cuartos del total de la actividad económica de las empresas públicas (Margheritis:2000, p. 50). Cierto es que muchas de esas empresas tenían una pobre performance económica, graves problemas de endeudamiento y prestaban servicios cada vez más deficitarios, alejándose así del propósito social que había guiado su creación. No menos cierto es que entre estas distorsiones figuraba el hecho de haberse convertido en un espacio de prebendas para el sector privado, proveedor de servicios (la llamada “patria contratista”), como de afirmación, muchas veces clientelar, de los poderosos sindicatos.

Gran parte de la estrategia de legitimación desarrollada por el nuevo gobierno y sus aliados apuntó entonces a desacreditar el rol monopólico del Estado, augurando que la libertad de mercado aseguraría la eficiencia y la modernización, sin necesidad de que se implementaran los controles propios que requería un modelo semiestatista, estancado y corrupto. Sin embargo, la forma que adoptó el proceso de privatizaciones estuvo lejos de corresponderse con las altisonantes declaraciones que postulaban la asociación natural entre democracia, merca-

do y globalización. Antes bien, el proceso de privatizaciones implicó la destrucción de las capacidades estatales, así como la constitución de mercados monopólicos, paradójicamente favorecidos por la propia protección estatal, que terminaron de asegurar, por medio de condiciones ventajosas de explotación, la obtención de una “rentabilidad diferencial” (Notcheff:1998; Basualdo:2000). Una de las claves del período, a saber, la rápida conformación de un nuevo entramado económico, suerte de “comunidad de negocios” (Basualdo:2002) entre grupos económicos nacionales y empresas transnacionales, asociados en la adquisición de empresas estatales privatizadas, fue posible gracias a la corrupción y cooptación de la clase política local —como lo reflejan los grandes escándalos denunciados a lo largo de una década—, así como por la fuerte imbricación preexistente entre el equipo económico rector, con los grupos privados. Por último, no hay que olvidar que durante el proceso de privatizaciones, el Estado generó nuevas normas jurídicas, que favorecieron la implantación de capitales extranjeros, al tiempo que garantizaban la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales, como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

En segundo lugar, en la medida en que las políticas en curso implicaron una redistribución importante del poder social (generando un contingente amplio y heterogéneo de “nuevos perdedores”), el Estado se vio obligado a reforzar las estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución —cada vez más masiva— de planes sociales y de asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas y movilizadas. Ciertamente, recordemos que desde fines de los 80 la acción estatal se encaminó a reformular la relación con las poblaciones más desfavorecidas por medio de una acción política más localizada y barrial, orientada a la gestión de las “necesidades básicas insatisfechas”. De esta manera, el pasaje de la fábrica al barrio fue consolidándose a partir de la articulación entre políticas sociales focalizadas y organizaciones comunitarias: los primeros ensayos de asistencia alimentaria (impulsada por el gobierno radical y los diferentes gobiernos provinciales, en manos del justicialismo, a fines de los 80), fueron seguidos por una política

de ayuda social que incluiría la salud y la infancia. Estos procesos reorganizaron la política en función del mediador barrial, encargado de la organización y distribución de recursos alimentarios, cuya expresión paradigmática serían las “manzaneiras”, en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, durante la segunda mitad de los 90, en ausencia de estrategias de creación masiva de ocupación formal, los gobiernos argentinos se abocarían a implementar de manera más sistemática una serie de programas de emergencia ocupacional —que contemplaban la entrega de subsidios monetarios a cambio de una contraprestación laboral en proyectos de interés público o social—, destinados a contener, al menos parcialmente, a aquellos que quedaban excluidos del mercado de trabajo y se movilizaban a través de las incipientes organizaciones de desocupados. Los sucesivos programas nacionales, como el Plan Trabajar (I, II y III, del Estado nacional) y los planes provinciales, como el Barrios Bonaerenses, así como más cercanamente los actuales Planes Jefas y Jefes de Hogar, han sido instrumentos característicos de estas estrategias asistenciales.

En tercer y último lugar, el Estado se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional, apuntando al control de las poblaciones pobres, y a la represión y criminalización del conflicto social. Así, frente a la pérdida de integración de las sociedades y el creciente aumento de las desigualdades, el Estado aumentó considerablemente su poder de policía, lo cual trajo como consecuencia un progresivo deslizamiento hacia un “Estado de Seguridad”. Ese rasgo, que actualmente configura las democracias latinoamericanas, no debería ser desvinculado de la emergencia de nuevas fronteras político-jurídicas, en relación, entre otras cosas, al tratamiento de la conflictividad social que apunta a la criminalización de diversas categorías sociales, desde jóvenes pobres y minorías extranjeras, hasta organizaciones político-sociales movilizadas.

EL IMPACTO DEL PROCESO DE PRIVATIZACIONES

En rigor, el proceso de reestructuración del Estado mediante las privatizaciones tuvo dos etapas. La primera se extendió desde la asunción de Menem hasta principios de 1991 y abarcó la transferencia a manos privadas de la empresa telefónica (Entel) y los transportes aéreos (Aerolíneas Argentinas), ambos convertidos en casos ejemplares. También en esta primera fase se dio inicio a otras privatizaciones, concluidas más adelante, que incluyeron la red vial, canales de televisión, radios, áreas petroleras, polos petroquímicos y líneas de ferrocarriles. Esta primera ola de privatizaciones fue acompañada por fuertes conflictos laborales, entre los que se destacaron las movilizaciones de los trabajadores telefónicos y las de la comunidad de San Nicolás, ligada a la empresa Somisa. Por su parte, la segunda etapa, según consigna Margheritis (2000, pp. 54-55), abarcó “la privatización del servicio eléctrico, gasífero, de agua y cloacales, así como también el resto de los ferrocarriles, las áreas petroleras remanentes, las firmas siderúrgicas, alrededor de 500 edificios públicos, la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, algunos hoteles, fábricas militares, la junta nacional y los elevadores portuarios de granos, el mercado de hacienda y el hipódromo. En 1994 concluyó la reforma del sistema nacional de seguridad social y la transferencia de transporte marítimo, la caja nacional de seguro y la corporación agrícola nacional. Dada sus especificidades y su ubicación temporal, la venta de YPF puede ser considerada un caso intermedio, pues reúne características de ambas etapas del proceso privatizador”. Esta segunda fase estuvo menos marcada por los conflictos sindicales que la primera, entre otras cosas debido a que el Estado prometió la distribución de acciones a los trabajadores, garantizando —en ciertos casos— una participación de los sindicatos en el proceso de privatización (Torre:1998, p. 76). Asimismo, necesario es decir que a partir de 1991, las expectativas económicas ya eran otras, pues el plan de estabilización implementado por Cavallo había logrado detener la inflación y no eran pocos los argentinos que habían interiorizado un discurso crítico —y hasta vergonzante— respecto del rol del Estado, adhiriendo al consenso neoliberal.

El impacto social del desguace del Estado sobre el empleo fue devastador. En cifras absolutas, si se consideran sólo las siete empresas más importantes del sector (teléfonos, correos, transporte aéreo, gas, agua, energía y transporte ferroviario), hacia 1985 había 243.354 empleados del sector público. En 1998, se habían reducido a 75.770 (Duarte:2002, p. 71). Por lo general, los despidos masivos se combinaron con planes de retiro más o menos compulsivos, implementados en un lapso muy breve, durante el período previo a la privatización, cuando las empresas eran declaradas “sujetas a privatización”. De esa manera, se habilitaban planes draconianos de racionalización, en manos de todopoderosos interventores que respondían directamente al Poder Ejecutivo. Así, entre 1991 y 1992, la reducción del empleo perjudicó nada menos que a 100.000 trabajadores del sector público (Duarte:2002, p. 75).

Es importante subrayar que este proceso afectó directa e indirectamente a comunidades enteras, como lo refleja de manera paradigmática la privatización de las empresas productivas del Estado. Ejemplo de ello es el caso de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que desde su creación en 1922 hasta su privatización y reestructuración setenta años más tarde, fue el motor de desarrollo de varias economías regionales. Más aún, YPF, la empresa productiva estatal más grande del país, construyó un “modelo de civilización territorial” pues la modalidad de ocupación del territorio no se circunscribió a la sola explotación de los recursos naturales, sino que incluyó en todos los casos una extensa red de servicios sociales, recreativos y residenciales para el personal permanente (Rofman:1999, p. 199). En este sentido, YPF era un verdadero Estado dentro del Estado, pues el mundo laboral de la zona explotada, y de manera más extensa, el conjunto de la vida social estaban estructurados directa o indirectamente en torno de YPF.

En 1990, la empresa, que contaba con 51.000 empleados, luego de un acelerado proceso de reestructuración que incluía retiros voluntarios y despidos, pasó a tener 5600. Ello repercutió sobre la actividad económica y el empleo: por ejemplo, para el caso de Mosconi y Tartagal (provincia de Salta), el retiro de YPF en 1993 implicó una caída del 73% de la actividad petrolera, que a su vez se tradujo en una retracción del 75% en el empleo

(Svampa y Pereyra:2003). Por otro lado, la reestructuración implicó el cuasi desmantelamiento de la actividad económica de amplios sectores de la comunidad, cuyos servicios estaban orientados tanto a la empresa como al personal de YPF. Esto revela la ausencia de una estrategia de reconversión productiva en los dos niveles, esto es, respecto de la zona, integralmente dependiente de la acción territorial de YPF, y respecto de los propios trabajadores, cuya estabilidad laboral y oportunidades de vida aparecían indisociablemente ligadas —en muchos casos, desde hacía varias generaciones— a la empresa estatal. Así, en mayo de 2001, mientras que la tasa de desocupación en los aglomerados urbanos de Neuquén-Plottier era de 15,2%, en Cutral-Co y Plaza Huincul, eje de la economía petrolera del norte patagónico, alcanzaba el 32,5%. A su vez, mientras que en Salta capital la desocupación era del 17,1%, en Mosconi-Tartagal alcanzaba el 42,8% (Svampa y Pereyra:2003).

Aunque sin las dimensiones de su par petrolera, la empresa Somisa (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina), radicada en el eje San Nicolás-Ramallo, conoció un proceso similar. Como consigna Peñalba (2000), entre 1991 y 1992, el 50% de un total de 12.000 trabajadores quedaron sin empleo. Al igual que en el caso de YPF, la reestructuración se realizó combinando retiros voluntarios y despidos. El impacto sobre la tasa de desocupación abierta en la región (16%, de los cuales el 80% eran despidos de Somisa), así como sobre la de subocupación (13%) son más que elocuentes. Asimismo, las consecuencias de este proceso se hicieron visibles en el aumento de la proporción de empleo precario y en negro. Aquí también la ausencia de una planificación y una estrategia de reconversión económica hizo que parte de las indemnizaciones desembocara en emprendimientos comerciales individuales (kioscos, remiserías) o fuera destinada al consumo y adquisición de bienes (compra de automóviles, casas). Poco tiempo después, gran parte de los comercios bajaron las cortinas, parte de los bienes fueron vendidos, y la desocupación comenzó a trepar a tasas muy superiores respecto del resto del país.

Por otro lado, el proceso de ajuste y reestructuración desbordó la esfera del Estado, para alcanzar la totalidad del mercado de trabajo, por medio de un conjunto de reformas laborales

que implicaron la “reformulación de las fronteras internas del trabajo asalariado” (Palomino:2005). Dichas reformas trajeron aparejado el desmantelamiento del marco regulatorio anterior, fundado en los derechos del trabajador y el poder de negociación de los sindicatos.

Así, la implementación de un modelo de acumulación flexible produjo una estructuración diferente del mercado de trabajo, reflejada en la multiplicación de las formas de contratación (empleo autónomo, tercerización, subcontratación, trabajos temporarios). Ello se hizo efectivo en 1991, gracias a la sanción de la ley 24.013 o “Nueva Ley de Empleo”, que conllevó un cambio en el modo en que el Estado intervenía en la relación capital-trabajo. La ley reconocía la emergencia laboral al tiempo que planteaba una doble estrategia: por un lado, la flexibilización del contrato de trabajo formal y la creación de “nuevas modalidades de contratación”, destinadas a facilitar la entrada y salida del mercado de trabajo; por el otro, el desarrollo de políticas sociales compensatorias. Esta ley redujo asimismo los aportes patronales a la seguridad social, modificó las normas sobre accidentes y enfermedades laborales y creó un seguro de desempleo que cubría sólo ciertos sectores del mercado formal. Las reformas incluyeron también un decreto que incentivaba la descentralización de la negociación colectiva y otro que implementó el aumento por productividad. De esta manera, en la década del 90, el llamado “costo laboral” bajó un 62%, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, se observó también un notorio aumento del empleo no registrado, que pasó del 26,5% en 1990, al 35% en 1999 (Beccaria:2002), y del subempleo, que en 2001 alcanzaba el 16,3% (Indec). Pese a las críticas programáticas, esta política laboral encontró continuidad durante el breve gobierno de la Alianza, con la promulgación de la polémica ley de flexibilización laboral, que vino así a confirmar el cambio de las reglas de juego en las relaciones entre el capital y el trabajo.

En fin, la precarización laboral fue acompañada por nuevas formas de contratación, las cuales se difundieron de manera vertiginosa por medio de los contratos de “prestación de servicios” (tanto en el ámbito privado como en el público), y la derivación a terceros o externalización (extendida sobre todo en el

sector industrial y las nuevas áreas de comercialización). Una de las consecuencias de este fenómeno fue la emergencia de un “derecho del trabajo de segundo tipo” (Palomino:2005), que afectó la capacidad de representación y de reclutamiento del movimiento sindical. Más aún, estas transformaciones, operadas en un contexto de ajuste del gasto público y de desindustrialización, aceleraron notablemente el proceso de quiebre del poder sindical, reorientando sus fines y limitando su peso específico dentro de la sociedad, y acentuaron el proceso de territorialización de las clases populares, visible en el empobrecimiento y la tendencia a la segregación socio-espacial.

MODERNIZACIÓN EXCLUYENTE Y ASIMETRÍAS REGIONALES

El doble proceso de modernización y exclusión que afectó al sistema económico nacional se reprodujo en cada una de las regiones que lo integran (Rofman:1999, p. 228). En este sentido, la política de apertura económica significó el desmantelamiento de la red de regulaciones que garantizaban un lugar a las economías regionales en la economía nacional. Como afirman Vaca y Cao (2004, p. 76), esta política traducía una manera diferente de concebir el espacio geográfico nacional, que desplazaba la idea de un modelo global de territorio subsidiado desde el Estado nacional, a la de “territorio eficiente”. En consecuencia, la viabilidad o inviabilidad de las economías regionales pasó a medirse en función de la tasa de rentabilidad. Dicha política mantuvo las asimetrías regionales preexistentes, al tiempo que conllevó la crisis y desaparición de actores sociales vinculados al anterior modelo (economías regionales ligadas a empresas estatales, pymes, minifundios) y en muchos casos condujo a la reprimarización de la economía, a través de la expansión de enclaves de exportación.

Así, una mirada nacional del impacto que tuvieron el ajuste y la puesta en marcha del modelo neoliberal requiere sin duda dar cuenta de sus dimensiones regionales. Para ello, podemos tomar el informe del PNUD (2002), el cual establece tres grandes zonas económicamente diferenciadas: en primer lugar, un Área central, de gran desarrollo económico, que se caracteriza

por la existencia de "economías urbanas de servicio" (ciudad de Buenos Aires), así como por la existencia de "estructuras económicas de gran tamaño y diversificación" (provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). Aquí, el proceso de modernización excluyente desembocó en una dinámica de desindustrialización, que fue acompañada por la concentración creciente de la actividad económica en manos de grupos privados y empresas multinacionales. Ciertamente, el proceso de reforma estructural impulsó una dinámica de fragmentación y expulsión que terminó arrastrando a sectores fuertemente asalariados e integrados al mercado formal, además de otras franjas de trabajadores vinculados al trabajo informal.

En segundo lugar, el informe alude a un *Área mixta*, conformada por las provincias patagónicas (a excepción de Río Negro), caracterizadas como "estructuras productivas basadas en el uso intensivo de recursos no renovables". Lo notorio aquí es la presencia de grandes empresas multinacionales, beneficiadas por el proceso de privatización, vinculadas a la explotación de hidrocarburos. Estas provincias, que presentan una baja densidad poblacional y un ingreso per cápita mayor que el de otras provincias, sufrieron sin embargo los efectos del pasaje de un modelo de "civilización territorial" (como el que encarnaba YPF), a un esquema de explotación más asociado a una economía de enclave, ligada a las exportaciones, cuyos beneficios difícilmente llegan a derramarse sobre el conjunto de los actores sociales de la zona (Rofman:1999).

En tercer lugar, se encuentran las provincias del *Área periférica*, que se mantienen rezagadas en términos de crecimiento económico, más allá del desarrollo de ciertas áreas marginales, ligadas a la expansión de la frontera agrícola (producción de soja transgénica) y minera (Río Negro, Catamarca), que en los últimos años ha movilizado inversiones millonarias. Estas provincias se caracterizan por un deterioro económico mayor que el de otras áreas del país, luego del decreto de desregulación de 1991, aun si uno de sus rasgos mayores es el peso (e incremento) del empleo público, como visible herramienta de control político. Entre las provincias periféricas *intermedias*, el informe incluye a Río Negro, Entre Ríos, Tucumán, Salta y La Pampa, donde se detecta la convivencia de núcleos de explota-

ción económica tradicional con desarrollos más modernos (agroindustria). En este mismo grupo, pero con índices más elevados de desarrollo humano, se incluyen Mendoza y San Luis. Por último, en el grupo de las provincias periféricas *rezagadas*, caracterizadas por fuertes rigideces en su aparato productivo, están Misiones, San Juan y Jujuy, mientras que La Rioja, Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, presentan un marcado retraso productivo y empresarial. En cuanto a Catamarca, pese a que en los últimos años presenta un desarrollo minero importante, el modelo de explotación económica sigue la línea típica de una economía de enclave.

En cuanto a las fuertes asimetrías regionales existentes, el informe citado señala que "las dos jurisdicciones de mayor envergadura (provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires) dan cuenta del 59% del total de producto bruto geográfico. Les siguen, en dimensión económica, las provincias de Córdoba y Santa Fe —alrededor de un 8% del total, cada una— y Mendoza, con una participación de casi 4%. Estas cinco jurisdicciones, donde residía aproximadamente el 67% de la población del país, generaba cerca del 85% del producto total. El resto de las provincias (19), aportaba el 15% del producto bruto interno y cada una de ellas tenía una dimensión económica inferior al 10% de la provincia de Buenos Aires" (PNUD:2002, p. 32).

Por otro lado, tengamos en cuenta que el proceso de modernización excluyente implicó la introducción de un nuevo modelo agrario, que trajo aparejados grandes cambios en los sistemas de organización y explotación tradicionales. Cierto es que el nuevo modelo trajo consigo aumentos importantes de la producción y la productividad. Pero, asimismo, esta política afectó severamente a pequeños y medianos propietarios, favoreciendo la concentración de la producción en unidades de mayor tamaño (Teubal y Rodríguez:2001, pp. 75-76). En realidad, es posible distinguir tres procesos que, en gran medida, reflejan en sus diferentes aspectos las dimensiones inherentes al modelo neoliberal aplicado al sector agrario argentino. Así, en primer lugar durante los primeros años de la década del 90, el discurso oficial se centró en dos ejes: la modernización, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, y la competitividad, mediante la producción en gran escala. El modelo estimulaba

al pequeño productor a endeudarse, o bien a ceder (vender o alquilar) la tierra a los grandes productores. Una de las consecuencias de ello fue la desaparición de numerosas pequeñas y medianas unidades de producción, lo cual supuso la modificación de la estructura agraria tradicional, anteriormente basada en la convivencia entre las grandes unidades de producción y la producción minifundista (GER:2004). Al mismo tiempo, la crisis en el campo se expresó también en la expansión de la pluriactividad, pues los titulares y trabajadores de las explotaciones comenzaron a desarrollar actividades fuera de éstas (Murmis:1998, p. 230).

En segundo lugar, el proceso de apertura económica posibilitó la introducción de nuevas tecnologías (semilla transgénica, asociada a la siembra directa), que modificaron bruscamente el modelo local de organización de la producción, orientada al mercado externo. Estas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario, que incrementó notablemente la producción de soja transgénica, colocando a la Argentina entre los primeros exportadores mundiales. El salto en la producción (la "sojización" del modelo agrario argentino) se dio a fines de los 90. Actualmente, casi más del 50% de la superficie sembrada de la Argentina se cultiva utilizando las nuevas tecnologías (Bisang:2003, p. 431). Sin embargo, el impacto social de la introducción de estas nuevas tecnologías no puede ser minimizado. Un informe elaborado por Mora y Araujo (citado en Trigo *et al.*:2002) consigna que el número de explotaciones se redujo un 32%, de 176.000 a 116.000, con un incremento en la superficie media, que pasó de 243 a 357 hectáreas. Asimismo, las técnicas de siembra directa disminuyeron entre un 28 y un 37% el uso de mano de obra (GER:2004, p. 112), lo que generó un fuerte éxodo de la población.

En tercer lugar, en los últimos años se ha registrado la expansión de las fronteras agropecuarias y mineras, pues esas actividades tienden a radicarse en las áreas marginales del país. Así, entre 1993 y 1999, la superficie total sembrada de soja creció casi un 50%; pero en Entre Ríos se incrementó en un 309%, y en Santiago del Estero, en un 161% (Bisang:2003, p. 416). Estos procesos afectan sobre todo a los campesinos y a las comunidades indígenas, quienes "ven tambalear sus derechos legales o

consuetudinarios" y están en el origen de desalojos violentos, llevados a cabo por los nuevos y viejos inversores —como las empresas sojeras o los ingenios azucareros (GER:2004)—, en muchos casos con la connivencia de poderes locales y/o provinciales.¹ Por último, recientemente, la expansión de la frontera minera, llevada a cabo por empresas transnacionales, ha generado múltiples movilizaciones multisectoriales en defensa del hábitat, que cuestionan el desarrollo de la minería tóxica.

* * *

Durante la década del 90 asistimos al final de la "excepcionalidad argentina" en el contexto latinoamericano. Más allá de las asimetrías regionales y de las jerarquías sociales, esta "excepcionalidad" consistía en la presencia de una lógica igualitaria en la matriz social, la que iba adquiriendo diferentes registros de significación e inclusión a lo largo del tiempo. Así, en términos generales, esto aparecía ilustrado por la confianza en el progreso social indefinido, asociado a la fuerte movilidad social ascendente; en términos más específicos, la "excepcionalidad" fue incluyendo fuertes referencias a un modelo de integración, favorecido por la existencia de un Estado Social, más allá de sus imperfecciones o disfuncionamientos (modelo nacional-popular); por último, la "excepcionalidad" involucraba tanto a las clases medias, consideradas como "el agente integrador" por excelencia, como a un sector significativo de las clases populares, cuya incorporación en términos de derechos sociales se había realizado durante el primer peronismo.

Las transformaciones de los 90 desembocarían en un inédito proceso de "descolectivización" (Castel:1995 y 2000) de vastos sectores sociales. Retomamos el término "descolectivización" para hacer referencia a la pérdida de los soportes colectivos que configuraban la identidad del sujeto (sobre todo, referidos al mundo del trabajo y la política) y, por consiguiente, a la entrada en un período de "individualización" de lo social.

En consecuencia, en pocos años, la cartografía social del país varió considerablemente. Al ritmo de las privatizaciones, la desindustrialización y el aumento de las desigualdades sociales,

el paisaje urbano también reveló transformaciones importantes. Al empobrecimiento visible de importantes centros regionales, anteriormente prósperos, algunos de los cuales, luego de la privatización pasaron a ser verdaderos "pueblos fantasma" o "enclaves de exportación", hay que sumarle la imagen desoladora que presentaría cada vez más el cordón industrial de las áreas centrales, como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, convertidas en verdaderos cementerios de fábricas y de pequeños comercios, parcialmente reemplazados por cadenas de shoppings e hipermercados.

Así, durante los años 90, un enorme contingente de trabajadores fue expulsado del mercado de trabajo formal, mientras que otro sufrió las consecuencias de la precarización o buscó refugio en las actividades informales, como estrategia de supervivencia. En este sentido, tanto los ejemplos de YPF como el de Somisa, referidos más arriba, reflejan acabadamente el proceso de descolectivización y desincorporación producido por el colapso de los marcos sociales y laborales que acompañó a la privatización de las empresas públicas. En fin, este proceso incluyó también la destrucción de las identidades individuales y sociales, afectando muy especialmente los contornos tradicionales del mundo masculino. La dinámica afectó a gran parte de los jóvenes procedentes de los sectores medios y populares, que en muy pocos casos pudieron desarrollar algún tipo de vinculación con el mundo del trabajo, distanciados al mismo tiempo de las instituciones políticas y educativas.

Esos factores impulsaron la entrada de las mujeres en el mercado laboral. Esto fue particularmente notorio dentro de los sectores populares, donde las mujeres en muchos casos debieron asumir la responsabilidad de buscar los recursos que aseguraran la subsistencia mínima, mediante el trabajo doméstico o la labor comunitaria.

La descolectivización fue abarcando diferentes categorías sociales, desde grupos considerados como "pobres estructurales"—con una trayectoria marcada por la vulnerabilidad social y la precariedad laboral—, pasando por amplios segmentos de la clase trabajadora industrial, que hasta hacía poco tiempo habían contado con trabajo más o menos estable, hasta sectores de clases medias empobrecidas, cuyas oportunidades de vida

se habían reducido drásticamente en el último decenio. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que en la sociedad argentina no había redes de contención ni centros de formación o reconversión laboral; ni tampoco el Estado se propuso desarrollarlos a cabalidad, a la hora de aplicar crudas medidas de flexibilización o despidos masivos. En realidad, el tejido comunitario de la sociedad argentina preexistente, aunque incipientemente desarrollado en los 80, aparecía como insuficiente —y demasiado permeado por los intereses del Partido Justicialista o por los vínculos tradicionales y jerárquicos propios de las provincias periféricas— en la tarea de amortiguar el peso de tantas caídas.

La modernización excluyente se manifestó también en el campo argentino, en la desarticulación de la estructura agraria tradicional (reducción ostensible de unidades pequeñas y medianas de producción), y su reemplazo por una nueva estructura productiva en la región pampeana, basada en la aplicación de biotecnología, marcada por la concentración económica. Más recientemente, dicho proceso encuentra continuidad en la expansión de las fronteras de recursos naturales, tanto agropecuarios como mineros, en las llamadas áreas marginales (las provincias periféricas), donde se registra un comportamiento similar de los grandes agentes económicos (economías de enclave), a lo cual se añade una estrategia de desalojos y cercamiento de tierras, en detrimento de las poblaciones campesinas e indígenas, así como la amenaza del hábitat y la biodiversidad.

En fin, la modernización excluyente fue adoptando formas territoriales cada vez más radicales, ilustradas de manera emblemática por el proceso de autosegregación de las clases medias superiores, a través de la expansión de las urbanizaciones privadas (*countrys*, barrios privados), así como por la segregación obligada de un amplio contingente de excluidos del modelo, reflejada en la multiplicación de las villas de emergencia y los asentamientos.